



ENTREVISTA A LORENA ZÁRATE

Presidenta Habitat Internacional Coalition

1. Justo hace 50 años, Henri Lefebvre escribía el libro 'El derecho a la ciudad', donde expone el derecho a crear ciudades que respondan a las necesidades humanas y a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto. 50 años más tarde, ¿cree que estamos más cerca o más lejos de este concepto del 'derecho a la ciudad'?

Tenemos elementos para decir que estamos a la vez más cerca y más lejos que el derecho a la ciudad que hace 50 años, cuando se postula por primera vez. Más cerca en el sentido de la amplitud y la profundidad; no solamente de las demandas ciudadanas sino también de las iniciativas que se están impulsando en muchísimos lugares del mundo para construir y defender ciudades más democráticas, sostenibles e incluyentes. Ejemplo de ello es la lucha por ampliar espacios de equipamientos públicos y comunitarios frente una tendencia a la privatización o al abandono, avanzar hacia una cogestión -una gestión compartida de estos equipamientos o servicios públicos-; es decir, iniciativas de remunicipalización de servicios privatizados en la época neoliberal. El segundo bloque es claro, tiene que ver con la protección de la vivienda pública o la vivienda social y de alquiler.

Vemos sindicatos de inquilinos e inquilinas que, como hace cien años o un poco más, están resurgiendo con mucha fuerza en distintas ciudades e incluso en plataformas nacionales, y la promoción de otras opciones de protección y de gestión de otra vivienda con opciones cooperativas, colectivas; los fideicomisos de tierras y de vivienda, etc. Finalmente está el bloque ambiental, que tiene que ver con el cuidado del agua y las áreas verdes y la producción de alimentos. Actualmente existe una mayor conciencia del reciclaje y la disminución en el consumo, y muchas campañas a favor del transporte público masivo, de mayor espacios para peatones y bicicletas; una opción de transporte sostenible, colectivo, no motorizado y que puede recuperar las ciudades para la gente.

Por otro lado, también estamos más lejos, con las tendencias a la enorme especulación, a la concentración de la riqueza y a la inversión en enormes cantidades de dinero que llega a nuestras ciudades y que genera procesos de gentrificación descontrolados. En realidad no importa si la inversión es nacional o extranjera, pero el proceso se ve en todos los lugares del mundo, también en ciudades de escala mediana e incluso pequeñas. La expulsión de gente de barrios tradicionales y la destrucción no solamente de las viviendas, barrios y la infraestructura tradicional conlleva el desplazamiento de poblaciones tradicionales, de forma de vida y de redes de apoyo en muchos lugares del mundo. Son procesos muy fuertes, rápidos y masivos.

Por supuesto, también encontramos retrocesos alarmantes en el nivel de la democracia y de sus instituciones, un debilitamiento a nivel nacional y local, con concentración y re-centralización del poder, y políticas y discursos de intolerancia, xenofobia, misoginia, homofobia y violencia que tienen impactos cotidianos en la vida de la gente de nuestras ciudades.

2. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales en el impulso de políticas públicas que garanticen este 'derecho a la ciudad', teniendo en cuenta que las distintas Administraciones tienen diversas competencias?

Está claro que los gobiernos locales, en sus distintas formas, tienen un rol fundamental para el derecho de la ciudad. Para nosotros, el derecho a la ciudad incluye una visión de territorializar los derechos humanos tradicionales, pero también fortalecer los derechos de las ciudades. En este sentido, estamos convencidas de que tenemos que avanzar mediante unas asociaciones o alianzas más fuertes entre la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales, para poder avanzar y reclamar más recursos y más apoyos de todo tipo para los gobiernos locales, incluyendo un rol mucho más fuerte frente a gobiernos nacionales pero también frente a instancias y poderes supranacionales e internacionales.

Los gobiernos locales tienen posibilidades de hacer más cosas, están más cerca de la gente, sienten los problemas cotidianos con una mayor fuerza y presión, y tienen capacidad de co-gestionar con la ciudadanía y la sociedad civil y hacer un uso más eficaz y transparente de los recursos. También tienen una visión más integral del territorio de todas las dimensiones y desafíos del problema y que, más allá de los límites administrativos y municipales, se vuelven desafíos a escala metropolitana. De otro modo, también permiten resolver el tema de la continuidad de las políticas públicas, que vayan más allá de los ciclos electorales. Por supuesto, es un desafío muy grande en términos de competencias, sabemos fortalecer a, frente a instancias y poderes, de las políticas públicas que ha habido, desde los 90, procesos de devolución de responsabilidades y competencias a los gobiernos locales pero sin una descentralización de los recursos, no sólo los económicos, también jurídicos y sociales. Los gobiernos se dan cuenta que tienen que ir juntos con otros gobiernos locales de otros países demandando estas cuestiones.

3. ¿Y qué papel debería tener el Tercer Sector Social en la definición de estas políticas destinadas a asegurar el derecho a una vivienda, a vivir dignamente en la ciudad, a la igualdad de derechos?

El rol del tercer sector, y el rol de la ciudadanía en general, es fundamental. Se logran muy pocos cambios sin una ciudadanía movilizadora, sin un sector social fuerte, con capacidad no solo de protesta sino también de propuesta y transformación. No tenemos que olvidar que los derechos son conquistas sociales, y que los actores sociales son fundamentales en el hacer cotidiano de la ciudad, en la dimensión material, política, simbólica y cultural. Por otro lado, estamos conscientes desde todos los sectores que el tamaño de los problemas y de los desafíos a los que nos enfrentamos hoy, son demasiado grandes como para que un solo actor pueda hacerse cargo.

Vemos, por otra parte, que el sector social -lo hemos denunciado en distintos sitios- en muchas ciudades es totalmente dejado fuera de los análisis sobretodo a la hora de pensar en propuestas o en su transformación.

Hace unos años se pusieron de moda las asociaciones público-privadas con un impacto muy fuerte a nivel de las ciudades y la gestión local. Gobiernos locales que reciben más competencias y sin los recursos, se vieron obligados a buscar recursos en otras esferas, en muchos casos de un sector privado cada vez más transnacional y corporativo. En esas asociaciones quedaron fuera las organizaciones sociales y se desconoce toda la capacidad social de hacer, y no hay acceso a recursos públicos. Nos dicen que el sector privado atrae la inversión, pero también sabemos que, en muchos casos, eso es relativo, y que en realidad lo que hay son subsidios y una transferencia de recursos públicos hacia actores e intereses privados. Tenemos que reclamar nuestro lugar como organizaciones de la sociedad, en lo que aportamos cotidianamente a la construcción de nuestras ciudades; más democráticas, más incluyentes, más sostenibles. Sabemos que en muchos casos las políticas públicas más interesantes que existen a nivel local -e incluso a nivel nacional- han venido de propuestas e iniciativas sociales.

4. Y por qué cree que, en determinados actores, aún no se ve el Tercer Sector Social como un aliado estratégico en el desarrollo de políticas y soluciones a retos sociales importantes?

Esta situación varía en distintos sitios, pero me parece que ha habido una especie de imposición de un mantra de que, si bien los problemas nos afectan a todos, solo hay capacidad de reaccionar y de hacer cosas desde el sector público o el privado. Desde lo social también ha habido un gran deterioro y un gran ataque al sector y una gran invisibilización y criminalización en distintos lugares. No hay que olvidar algunos estudios que muestran que en los últimos diez años más de setenta países han transformado sus leyes sobre el accionar de las organizaciones de la sociedad civil. Han hecho que se vuelva más difícil o incluso imposible en términos económicos, jurídicos y financieros, y esto no importa qué tipo de gobierno, sea de derecha, izquierda o centro, en una tendencia que incluso amnistía internacional reconocía hacía unos años. También hay mucho miedo, desconfianza hacia sector social respecto a que no hay capacidad de hacer las cosas ni representatividad.

Nos toca constantemente estar demostrando lo que sabemos y podemos hacer, se nos exige más que a otros actores, o se nos imponen las mismas reglas de otras; por ejemplo, cooperativas de crédito social que, en algunos países, hacen frente a regulaciones del sector bancario o financiero. Por supuesto, también hay que hacer autocrítica, fortalecer la capacitación en la gestión, conocer mejor la situación de nuestros barrios y ciudades, que cambia constantemente... El desafío metropolitano es enorme para nuestras organizaciones, para trabajar más allá de lo sectorial de nuestras organizaciones y los límites administrativos. La concentración extrema de poder económico y político, a apropiación privada, tiene un efecto en la reducción de garantías y de derechos con ataques explícitos a las organizaciones sin fines de lucro. Las ciudades progresistas, conscientes de estas tendencias se han juntado para intercambiar experiencias, y parte de estas ciudades y declaraciones tienen que ver con una que se presentó en julio frente a las Naciones Unidas, en Nueva York, en un manifiesto municipalista de gobiernos locales por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Es interesante que estas ciudades (entre las cuales Montevideo, Barcelona, Londres, París etc.) reclamen más poder para poder enfrentarse al gran capital corporativo que se está beneficiando de la inversión inmobiliaria y que destroza nuestras ciudades y barrios. A la vez que reclaman más poderes, también se comprometen a trabajar distinto en la ciudad, con la promoción de distintas políticas, instrumentos e iniciativas para construir equipamientos, barrios junto con la ciudadanía y el sector social.

5. Precisamente, en Barcelona, una de las principales preocupaciones es la emergencia habitacional y la consecuente necesidad urgente de aumentar el parque de vivienda social. ¿Qué medidas cree que se deben tomar para dar respuesta a este reto?

Esta es una problemática global que estamos viendo en muchas ciudades del mundo, de distintos tamaños y bajo distintos gobiernos. Esto obedece a distintas tendencias generales, hay varios estudios que hablan de cómo el cambio en los mercados financieros y en sus instrumentos ha permitido que esto ocurra.

Es una paradoja tremenda: más construcción de vivienda y de pisos sociales que nunca antes, pero, a la vez, una crisis habitacional que nunca antes tampoco habíamos visto. Lo que básicamente ha sucedido -y creo que Barcelona ha caído justamente en lo mismo-, es que en los últimos 25-30 años, los gobiernos se han retirado de la producción y la gestión directa de vivienda, y se ha dejado de producir vivienda pública. Al mismo tiempo no han regulado el mercado, para que el sector privado incluyera la vivienda de interés social; no se ha protegido lo que ya había, se ha deteriorado, y, en muchos casos, se ha privatizado con políticas explícitas. Esto ha sucedido sobretodo en Europa, Estados Unidos y Canadá; países donde tampoco se ha protegido al inquilino. Entendiendo cuáles han sido los problemas y las tendencias, también se pueden identificar claramente las medidas para solucionarlo. Creo que Barcelona está avanzando en esto, otras ciudades en Cataluña y, sin duda, otras ciudades del mundo. Por un lado, proteger el parque público del deterioro y a sus inquilinos. Por otra parte, es fundamental identificar la vivienda vacía y ver qué usos se le pueden dar, con políticas que incentiven su utilización e incluso que penalicen el hecho de tener viviendas vacantes o subutilizadas. Hay instrumentos de planificación y fiscales que básicamente aumentan los impuestos de la vivienda vacante para presionar que sus dueños le den un uso social.

Asimismo, una línea muy importante también es negociar, actitud a la que se ha suscrito, por ejemplo, Barcelona. Negociar con los bancos y con grandes tenedores de viviendas abandonadas y ver cómo se puede llegar a acuerdos como la dación en pago. Por supuesto, también es necesario fortalecer -y aquí entraría el papel del Tercer Sector- e incluirnos en la posibilidad de construir viviendas a través de cooperativas, fideicomisos, para que podamos participar en la construcción de alternativas. También nos incumbe la falta de regulación en los precios del suelo, alquileres y viviendas que se dejaron de controlar hace 25-30 años en la mayoría de los países. Hoy en día, plataformas como Airbnb pone al servicio usos turísticos y de corto plazo a precios que nada tienen que ver con las posibilidades de la gente en el nivel local.

Los desafíos son grandes pero las políticas e iniciativas que se están tomando son muchas y serias. En este sentido creo que es muy importante juntar las voces locales frente a los actores nacionales y globales justamente para mostrar estas alternativas y mostrar qué se puede hacer. Y está claro que es necesario contar con más apoyo de las otras esferas.